**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL**

**

**JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD**

**DEL CIRCUITO DE BOGOTA**

**SECCION PRIMERA**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veinte (2020)

Hora: 5:00 pm

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO No.** | **11001 – 3334 – 003 - 2020 – 000-66- 00** |
| **CLASE:** | **HABEAS CORPUS** |
| **ACCIONANTE:** | **PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA** |
| **ACCIONADOS:** | **JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL- JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ** |

Procede el Despacho a pronunciarse respecto de la acción constitucional de Habeas Corpus interpuesta por el señor **PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA**, identificado con la cédula de ciudadanía 8.735.167, en contra de **JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL-.**

**IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE**

Se trata del señor **PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA**, identificado con la cédula de ciudadanía **8.735.167**, actualmente recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB –“LA PICOTA”.

**DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO**

El accionante aduce que se están vulnerando el derecho a la libertad, por lo que considera que se desconoce lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política.

**COMPETENCIA:**

De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 2 de la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006 y en el Acuerdo PSAA 07-3972 del 13 de marzo de 2007, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura, este Despacho es competente para conocer de la presente acción de HABEAS CORPUS.

**LA PRETENSIÓN.**

Se pretende la libertad condicional del señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, por haber superado el cumplimiento de las 3/5 partes de la condena impuesta.

Asimismo, solicita se le otorgue la libertad, transitoria condicionada y anticipada por haber cumplido con los aportes concretos y verificables al esclarecimiento de la verdad.

**HECHOS**

En el escrito de Habeas Corpus, se relata lo siguiente:

1- El 3 de mayo de 2017, el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la pena de 161 meses de prisión, por el delito de concierto para delinquir, agravado por financiar la ilícita asociación, concurriendo la circunstancia de mayor punibilidad consistente en ejecutar el comportamiento sobre recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la colectividad.

2. Refiere que se encuentra privado de la libertad desde el 23 de enero de 2014, por lo que a su juicio cuenta con un tiempo físico de 74 meses y 3 días.

Asimismo, indica que, hasta el mes de diciembre de 2019, se le había reconocido la redención de la pena en 29 meses y 20 días.

3. Indica que tiene un total de pena cumplida de 103 meses y 23 días, por lo que ha superado las 3/5 partes de la condena, por lo que es procedente la libertad condicional prevista en el artículo 64 del Código Penal, máxime cuando se presenta la actual pandemia de cara al hacinamiento carcelario.

4. Advierte que a través de la Resolución 00985 de 21 de febrero de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz, lo requirió para dentro del término de 20 días hábiles, ajuste y precise de qué manera el plan de aportes realizado permitirá alcanzar los fines de reparación y no repetición respecto de los bines jurídicos afectados por su asociación con grupos paramilitares, específicamente respecto de la libertades políticas, confianza cívica y legitimidad del Estado.

5. Explica la forma en la que procedió a cumplir con lo solicitado en la Resolución 00985 de 21 de febrero de 2020, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, esto es a través del otorgamiento de becas entre otras.

6. Precisa que, con el fin de acreditar la procedencia de libertad transitoria, condicionada y anticipada, realizó el aporte concreto y verificable para el esclarecimiento de la verdad, al haber remitido a la Comisión de la Verdad, los parámetros para el inicio de ruta del aporte a la verdad a través de los correos electrónico de 26 de marzo de 2020.

7. Indica que se encuentra privado injustamente de la libertad por lo que acude a la acción constitucional de habeas corpus en la forma que lo establece la sentencia C-038 de 2018, la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017.

**TRÁMITE**

La acción constitucional de habeas corpus fue presentada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, quien, a través de oficio del 26 de marzo de 2020, la remitió por competencia, a la Oficina de Apoyo Judicial de Paloquemao (Fls. 2 y 3).

Por acta de reparto del 27 de marzo de 2020, le correspondió a este Juzgado el conocimiento de la acción constitucional de Habeas Corpus (Fl. 1).

Mediante auto de la misma fecha, el Despacho admitió la acción constitucional, teniendo como accionados al JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL y se vinculó a la JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ.

Providencia que se notificó a través de correo electrónico.

Por auto del 27 de marzo de 2020, se dispuso a requerir: i) Al JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, para que allegara copia de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual se condenó al señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA y ii) a LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, para que informe si, ha solicitado a esa Corporación la Libertad Transitoria, Condicional y Anticipada.

**CONTESTACION**

* **JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ.**

El Oficial Mayor del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, indicó que el 3 de mayo de 2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA a la pena de 161 meses de prisión.

Indicó que la autoridad penitenciaria no ha enviado documentación alguna para la redención de pena ni para el estudio de subrogado penal de la libertad condicional.

Por otra parte, precisó que el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, se encuentra privado de la libertad desde el 23 de enero de 2014, y advirtió que el accionante ha descontado 104 meses y 12.48 días, habiendo un faltante de 56 meses y 17.52 días para el cumplimiento efectivo de la pena.

* **INPEC – “LA PICOTA”**

El responsable Grupo de Gestión Legal del Privado de la Libertad del COMEB, informó que consultado el Sistema Integrado de Información Penitenciaria y Carcelaria y la correspondiente hoja de vida del accionante, se determinó que se registra como fecha de captura el 23 de enero de 2014 y como fecha de ingreso a ese establecimiento el 27 de enero de 2014, por el delito de concierto para delinquir.

Señala que la vigilancia de la pena de 13 años y 5 meses, está a cargo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Precisa que el accionante se encuentra ubicado en el pabellón 15, estructura 2 de ese centro penitenciario y remitió la cartilla biográfica.

* **SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS – JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ**

El Magistrado Ponente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Jurisdicción Especial para la Paz, solicitó negar lo concierne a la acción de Habeas Corpus y solicitó desvincular a esa Jurisdicción Especial, por cuanto no se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad del accionante.

Realizó un recuento de las actuaciones adelantadas ante esa Corporación, desde el 15 de enero de 2018 hasta el 21 de febrero de 2020, para precisar que a través de la Resolución 000985 del 21 de febrero de 2020, se aceptó el sometimiento del señor Pedro Mary Muvdi Aranguena como agente del Estado no integrante de fuerza pública (AENIFP), exclusivamente por los hechos por los que se adelantó el proceso penal radicado 30716, por el cual el mencionado ciudadano fue declarado penalmente responsable de concierto para delinquir agravado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Indica que en la referida resolución, se requirió al accionante para que adecuara su propuesta de régimen de condicionalidad, fijando los parámetros que debía tener en cuenta para ello, aclarándole que esto no buscaba sino optimizar tal plan, y advirtiéndole que este era susceptible de nuevos ajustes debido al proceso de dialógico y de las intervenciones que se vayan efectuando en el decurso transicional de las actuaciones.

Advierte que los ajustes solicitados, fueron presentados en el mismo escrito en el que interpone la acción de habeas corpus, la cual no está llamada a prosperar en cuanto a esa Jurisdicción compete, precisando:

-Si bien es cierto el compareciente y su apoderada atendieron el requerimiento de la Sala y presentaron las consideraciones que frente a su plan de régimen de condicionalidad le fueron solicitadas, todo en aras de obtener la concesión del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que fue solicitado en su favor desde un primer momento, no puede referirse que exista una mora por parte de esa Sala en estudiar dichos aportes para tomar la decisión correspondiente pues, itera, que la propuesta de compromiso claro, concreto y programado (CCCP) que había sido aportada, no cumplía con los estándares que para ello ha fijado la jurisdicción y fue por eso que se pidió que esta fuese amoldada.

Precisa que de conformidad con lo advertido, es necesario que los nuevos ajustes y contenidos, sean sometidos a una evaluación por parte de esta Sala y de las partes procesales, pues como bien lo ha dicho la Sección de Apelación:

*“(…) la mera formulación del pactum veritatis no es suficiente para garantizar a las víctimas del conflicto y a los órganos del sistema la fidelidad de dicha información. Con el fin de obtener la libertad como beneficio transitorio, las personas pueden comprometerse a brindar una verdad que no conocen, a inventar deliberadamente hechos y relaciones de poder, o bien, a callar datos relevantes para la determinación de responsabilidades y el esclarecimiento de las conductas ocurridas en el marco del conflicto armado interno colombiano”.*

Por lo anterior, explica que antes de conceder o no el beneficio, es necesario que se realice dentro de un término razonable, una evaluación de la aptitud preliminar del compromiso presentado, para lo cual se deberá tener presente que se está frente a una persona que se presume inocente, se comprometió a aportar verdad plena y que puede no haber reconocido responsabilidad sobre los hechos y conductas que se le imputan.

Lo anterior encuentra su justificación en que a la JEP no le está permitido rendir tributo a promesas vagas, aparentes, puramente retóricas, formales e insuficientes de respeto por los objetivos de la transición18, siendo entonces imperioso que estos se adecuen para así asegurar a través de ello, que los fines propios del SIVJRNR se cumplan.

Bajo el anterior panorama, corresponde efectuar una nueva evaluación de los aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición presentados por el compareciente y su apoderada, para posteriormente y solo de considerar que estos son en verdad suficientes a efectos de asegurar los fines propios de este Sistema Integral, verificar la posibilidad de conceder a su favor el beneficio provisional de libertad transitoria, condicionada y anticipada que es solicitado para él.

Precisa que, en este momento, dicha actividad está siendo desarrollada por la Sala; no obstante, cabe aclarar que en virtud del Acuerdo No. 009 del 16 de marzo de 2020, emanado del Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz, los términos judiciales de la JEP se encuentran suspendidos hasta el 13 de abril del año en curso por la situación de salud pública que a afecta al país. Por esta razón, las actividades y/o medidas necesarias para llevar a cabo tan importante tarea, serán decididas y adoptadas una vez estos se habiliten.

Sostiene que es importante reiterar que la concesión de cualquiera de los beneficios propios del SIVJRNR, es un trámite que debe agotarse en un **debido procedimiento**. En virtud de ello, no se puede pretender que a través de la acción de habeas corpus se omita o desconozca ese proceso, ni mucho menos que se declare anticipadamente la procedencia de la libertad, toda vez que el habeas corpus no puede ser utilizado para pretermitir los trámites ordinarios. Así lo ha decantado la jurisprudencia penal al señalar que:

La acción de habeas corpus fue concebida como una garantía esencial cuyo ejercicio de carácter informal, en principio demanda el estudio de cualquier situación de hecho que indique la privación de la libertad sin la existencia de una orden legalmente expedida por la autoridad competente, pero de manera alguna implica su uso indiscriminado, esto es, para pretermitir las instancias y los mecanismos judiciales ordinarios, pues ella se encuentra instituida como la última garantía fundamental con la que cuenta el perjudicado para restablecer el derecho que le ha conculcado.

De otra parte, es de vital importancia recordar que conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución, el artículo 1 de la Ley 1095 de 2006, la sentencia C 187 de 2006, y la jurisprudencia penal, el habeas corpus es una acción constitucional que tutela la libertad personal, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de alguna de las siguientes situaciones: i) La persona es privada de la libertad con violación de garantías constitucionales o legales; ii) Por configuración de una auténtica vía de hecho judicial en la providencia que ordena la privación de la libertad o en decisiones posteriores que impiden el acceso a la misma, como podría ser el caso de una medida de aseguramiento privativa de la libertad sin motivación suficiente o respecto de un delito que no acarrea prisión; y iii) Cuando a pesar de ser detenida de conformidad con el ordenamiento jurídico, su restricción de libertad se prolonga en el tiempo ilegalmente.

Por otra parte, considera el Magistrado Ponente que la acción constitucional interpuesta por la apoderada del señor Pedro Mary Muvdi Aranguenano está llamada a prosperar, por las siguientes razones:

-Refiere además, que el compareciente se encuentra privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria proferida en su contra por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso radicado No. 30716, autoridad que lo declaró responsable en calidad de autor del delito de concierto para delinquir, agravado por financiar la ilícita asociación y con la circunstancia de mayor punibilidad consistente en ejecutar la conducta sobre recursos destinados de manera lícita a la satisfacción de las necesidades básicas de una comunidad, siendo este el único proceso sobre el cual esta Jurisdicción se ha pronunciado y por el que se aceptó el sometimiento del referido ciudadano sin que, a la fecha, se tenga conocimiento de otra condena distinta a esta, ni tampoco se conozca sobre expedientes adicionales adelantados en su contra que hayan sido remitidos ante la JEP.

Por ende, concluye que en este asunto no aplica la causal primera, porque el accionante se encuentra privado de su libertad por cuenta de una determinación judicial que se presume legal y ajustada a derecho, pues de ello no obra prueba en contrario dentro del escrito de habeas corpus.

Ahora bien, en su escrito, el accionante no ataca la decisión proferida por esta Sala al aceptar su sometimiento a ella, ni tampoco aduce que la misma esté revestida de vías de hecho; es más, de ninguna manera plantea en la acción constitucional argumentos relacionados con la teoría de las vías de hecho, de modo que la segunda causal tampoco aplica.

En igual forma, explica que no se puede alegar una prolongación ilegal de la libertad por no haber hasta la fecha concedido a su favor el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, pues como se dijo anteriormente, su concesión, en el caso del señor Pedro Mary Muvdi Aranguena, demanda agotar un procedimiento de consulta a las partes y de un análisis exhaustivo que debe surtirse en la forma como se advirtió en precedencia y amoldado al procedimiento propio de esta Jurisdicción.

En consecuencia, mientras que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas no se pronuncie de fondo sobre los beneficios que a ella le competen, no puede aducirse la existencia de la causal tercera de habeas corpus.

Precia que en el presente asunto, no se presenta ninguna de las tres causales referidas por lo que no resulta ajustado a derecho conceder el amparo solicitado.

Finalmente, en cuanto al beneficio penal de libertad condicional que establece el artículo 64 del Código Penal , indica que se trata de un beneficio carcelario cuya concesión no se encuentra a cargo de su Jurisdicción, sino de la justicia ordinaria en cabeza del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que tiene a su cargo el asunto del accionante Muvdi Aranguena, por lo que es un aspecto ajeno a la competencia de la JEP y, por ende, no atribuible ni reclamable ante ella.

* **Fiscalía General de la Nación**

El Fiscal Noveno Seccional de la Unidad Contra los Delitos de Administración Pública - Dirección Seccional Magdalena, informó que una vez consultado el Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA-se encontró que contra del señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA se registra el delito abuso de confianza calificado, el cual se encuentra inactivo, como quiera que una vez se adelantaron las órdenes a policía judicial, se pudo establecer que la conducta denunciada devenía atípica, por lo cual, se emitió orden de archivo de la actuación por atipicidad de la conducta, de fecha 29 de enero de 2020.

Por lo que solicitó se le desvinculara de la acción constitucional de habeas corpus.

**MATERIAL PROBATORIO RECAUDADO**

* Copia de la consulta de actuaciones del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (Fls. 15 a 26 archivo DFP – acción de habeas corpus).
* Copia de la Cartilla Biográfica del señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, identificado con la cédula de ciudadanía 8.735.167, actualmente recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB –“LA PICOTA”, en la que se registra como fecha de captura el 23 de enero de 2014 y fecha de ingreso a ese centro penitenciario el 27 de enero de 2014 (Fls. 3 y 4 archivo DFP – Respuesta INPEC).
* Copia de la Resolución 000985 del 21 de febrero de 2020, por medio de la cual la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, dispuso: “*ACEPTAR el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz presentado por el Señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, identificado con cédula de ciudadanía número 8.735.167 de Barranquilla, únicamente por el proceso identificado bajo radicado 30716, por el que la Corte Suprema de Justicia lo declaro autor de concierto para delinquir, agravado por financiar la ilícita asociación y con la circunstancia de mayor punibilidad consistente en ejecutar la conducta sobre recursos destinados de manera licita a la satisfacción de las necesidades básicas de una comunidad, según lo considerado en la parte motiva de este pronunciamiento*”.
* Copia del Acuerdo AOG 009 de 2020, “*Por el cual se suspenden audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz*”, proferido por la presidenta de la JEP, la Sección de Apelación, Sección de Revisión de Sentencias, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Sala de Amnistía o Indulto, por el director de Investigación y Acusación y por la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual acordó: “*ordenar la suspensión de audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, a partir de la fecha y hasta el 20 de marzo de 2020. Esta suspensión no aplica en relación con el trámite de respuesta de Habeas Corpus*”.
* Copia de la Circular 015 de 2020 del 22 de marzo de 2020 expedida por la presidenta y la secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para La Paz, por medio de la cual se dispuso:

“1*. Ampliar la suspensión de audiencias y de términos judiciales a que se refiere la Circular 014 de 2020 expedida por la presidenta y la Secretaria Ejecutiva, hasta el 13 de abril de 2020. Esta suspensión no aplica para el trámite de respuesta a solicitudes de habeas corpus.*

*2. A partir de la publicación de la presente Circular y hasta el 13 de abril de 2020, los Magistrados y Magistradas de las Secciones del Tribunal Especial para la Paz, de las Salas de Justicia, el Director de la UIA, la Secretaria Ejecutiva, y demás funcionarios y empleados de la Jurisdicción Especial para la Paz, laborarán desde sus casas, a efectos de cumplir la ampliación del simulacro de aislamiento preventivo decretado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y el aislamiento preventivo 2 obligatorio decretado por el Presidente de la República. El trabajo en casa se cumplirá en el horario laboral ordinario de la Jurisdicción, esto es, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m”.*

**CONSIDERACIONES**

La acción constitucional de habeas Corpus, consagrada en el artículo 30 de la Carta Política y reglamentada por la Ley 1095 de 2 de noviembre de 2006, está encaminada a tutelar la libertad individual de las personas en aquellos eventos en que se encuentre privada de tan fundamental derecho con violación de sus garantías constitucionales y legales, o cuando dicha situación de privación se prolongue ilegalmente.

En ese sentido, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de hábeas corpus, como una acción reconocida en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

De igual modo, el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4 de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria sobre estados de excepción), contempla el hábeas corpus dentro de los derechos intangibles.

En ese orden de ideas, el habeas corpus es un derecho intangible y de aplicación inmediata consagrado en la Constitución Política y reconocido, además, en los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad.

En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, el cual reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Por ello, el derecho a la libertad no es absoluto, pues este afronta su restricción cuando el ciudadano es objeto de un proceso penal adelantado con base en el respeto del debido proceso y del derecho de defensa también constitucionalmente reglados.

El Habeas Corpus, se encuentra consagrado en el artículo 30 de la carta fundamental, así: *"...Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas...-"*; norma que fue desarrollada por la Ley 1095 de 2006, que en su artículo primero lo define como un derecho fundamental y a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien se encuentra privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales o esta se prolongue ilegalmente, acción que se debe resolver en el término de 36 horas.

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe también recordar que el hábeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:

1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (artículos 28 de la Constitución Política, 2o y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (artículos 345 de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura públicamente requerida (artículo 348 de la Ley 600 de 2000) y la captura excepcional (artículo 21 de la Ley 1142 de 2007).
2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en la ley para que el servidor público: a) lleve a cabo la actividad a que está obligado b) adopte la decisión correspondiente al caso (por ejemplo: definir su situación jurídica dentro del término legal, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras).

En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia en providencia del 23 de febrero de 2011[[1]](#footnote-1), señaló:

*“Ahora bien, el habeas corpus procede frente a dos motivos o situaciones amplias y genéricas: i) cuando la persona es privada de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y ii) cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.”*

Por tanto, itera el Juzgado, que la figura del habeas corpus es de carácter supletorio y residual, pues comporta una tutela específica para amparar la libertad, en el entendido de que solamente es admisible en cuanto el afectado no cuente con instrumentos idóneos para lograr la corrección de las irregularidades en su contra, y solamente tendrá viabilidad en la medida en que la vulneración sea actual.

**Análisis del caso concreto:**

El accionante, considera estar privado injustamente de la libertad por cuanto a su juicio la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- no le ha otorgado el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada; así como ha cumplido con las 3/5 partes de la pena impuesta, por lo que debe reconocérsele la libertad condicional prevista en el artículo 64 del Código Penal.

Del material probatorio allegado, el Juzgado encuentra que el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, identificado con la cédula de ciudadanía 8.735.167, actualmente está recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB –“LA PICOTA”, en cumplimiento de la pena de 161 meses de prisión, impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 3 de mayo de 2017, a cargo del Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para la verificación del cumplimiento de la pena.

Asimismo, pese a que en el escrito de habeas corpus, se hace referencia a otras condenas de la jurisdicción ordinaria, la Fiscalía General del Nación, expuso que la investigación adelantada por el delito de abuso de confianza radicado 110016000049201406830 se encuentra en estado inactivo con orden de archivo.

De tal manera que no se encuentra acreditado requerimiento judicial alguno diferente a la condena impuesta al señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 3 de mayo de 2017.

Por otra parte, el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, Corporación que mediante Resolución 000985 del 21 de febrero de 2020, precisó:

* Mediante documento radicado el 16 de abril de 2019, el solicitante y su apoderada presentaron respuesta a lo requerido en la Resolución 00786 de 2019. Señalaron que en distintos despachos de la Fiscalía General de la Nación se adelantan 8 investigaciones en contra del aspirante por los delitos de abuso de confianza calificado, fuga de presos, daño en los recursos naturales, estafa, peculado por apropiación, dos actuaciones por delitos sin precisar contra la administración pública y una actuación en la que el ilícito se encuentra por determinar. También indicaron que el señor MUVDI ARANGUENA aspira a la sustitución de la sanción penal, como medida para el tratamiento de la condena en su contra, dentro del escenario transicional de justicia. Por Ultimo, que presentaron por escrito la intención de sometimiento a la JEP del aspirante, ante veintidós autoridades de la jurisdicción ordinaria. En ocho ocasiones, como acaba de referirse, ante los correspondientes despachos de la Fiscalía General de la Nación; 12 por igual número de radicados, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y 2 ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, respectivamente.
* La respuesta relacionada en el numeral anterior fue adicionada con escrito radicado el 30 de abril de 2019, con el que la apoderada del solicitante aportó copia de trece documentos con los que, ante igual numero de autoridades ordinarias, manifestó la intención de sometimiento a la JEP de su poderdante. En igual sentido, con nuevo radicado del 17 de mayo de 2019, aportó copia de otros cuatro documentos de manifestación de intención de sometimiento ante igual número de despachos de la Fiscalía General de la Nación.
* La Contraloría General de la Republica informó mediante documento del 30 de abril de 2019 que, una vez examinada la base de datos de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, no se encontraron registros de antecedentes, indagaciones preliminares ni procesos de responsabilidad fiscal en contra del señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA.
* Con Resolución 03883 del 26 de julio de 2019, el despacho ponente, en atención al principio dialógico y al enfoque restaurativo de justicia, corrió traslado al Ministerio Público de la propuesta de aportes a la transición presentada por el señor MUVDI ARANGUENA, para que se pronunciara como representante de la sociedad y de las víctimas. También requirió al Grupo de Análisis de la Información (CRAI) de la JEP para que presentara concepto en el que se precisaran las afectaciones ocasionadas por los hechos por los que fue condenado el solicitante y se determinará el grado de aptitud restaurativa de la propuesta presentada.
* A través de la Resolución 007987 del 20 de diciembre de 2019, el despacho de conocimiento evaluó la aptitud restaurativa de la propuesta de aportes a la justicia transicional presentada por el señor MUVDI ARANGUENA. Como resultado, requirió al aspirante para que ajustara su propuesta en los ejes de verdad, reparación y no repetición. Adicionalmente reiteró la solicitud a la delegación del Ministerio Público ante la JEP, para que se pronunciara sobre la intención de sometimiento y el plan de aportes del solicitante. Por último, puso en conocimiento tanto del aspirante como del Ministerio Publico el concepto del GRAI sobre la propuesta inicial.

En la misma Resolución la JEP realizó las siguientes precisiones, que de manera sucinta se concretan así:

- En atención a lo solicitado, el aspirante, por intermedio de su apoderada, señaló con documento radicado el 16 de abril de 2019, que en distintos despachos de la Fiscalía General de la Nación cursan ocho investigaciones en su contra por la probable comisión de distintos delitos, algunos determinados, otros por determinar. Indicó también en el mismo documento que comunico por escrito su intención de sometimiento a la JEP ante 22 autoridades de la jurisdicción ordinaria. En 8 ocasiones ante distintos despachos de la Fiscalía General de la Nación, en 12, por igual número de radicados, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en dos ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Republica, respectivamente.

- De esta manera, debido a que la manifestación inicial de su voluntad de sometimiento fue efectuada respecto de los hechos por los que resultó condenado por la Corte Suprema de Justicia y debido a que allegó copia de la sentencia correspondiente, la Subsala decidirá aquí sobre el sentimiento del aspirante en relación con este especifico asunto. Sobre las demás actuaciones, por las que comunico su voluntad de sometimiento ante las respectivas autoridades ordinarias, la Subsala, con pronunciamiento independiente, asumirá conocimiento y efectuará los requerimientos necesarios para el correspondiente examen de competencia.

- Por lo tanto, para que se acepte el sometimiento a la JEP de los mencionados comparecientes voluntarios, estos deben presentar una propuesta de aportes a la transición que sea clara, concreta y programada, y que además cuente con aptitud restaurativa para propiciar un intercambio dialógico con las víctimas.

- Sin embargo, la propuesta que se presenta para efectos del sometimiento debe superar un test preliminar de aptitud. Esto quiere decir que, si la Subsala concluye que es lo suficientemente idónea para dar inicio a la comparecencia voluntaria del interesado, esto no implica que tal propuesta sea el documento definitivo y consolidado a partir del cual se supervisará el cumplimiento de los compromisos del compareciente con el SIVJRNR. Por lo tanto, a medida que transcurren las actuaciones, tanto la Jurisdicción, como las víctimas y demás intervinientes legalmente autorizados contribuirán a ajustar el plan de aportes por el que se verificara el cumplimiento del régimen de condicionalidad que supedita tanto la comparecencia, como todas las medidas del tratamiento especial de justicia.

- Lo primero que se debe señalar es que el aspirante dio respuesta a los requerimientos del despacho de conocimiento para que ajustara su propuesta de aportes. Los compromisos que asume con el esclarecimiento de la verdad constituyen un catálogo aceptable para esta etapa procesal, sobre aspectos del conflicto que se obliga a develar con un nivel superior a lo demostrado en la jurisdicción ordinaria. Lo anterior sin perjuicio de las ampliaciones respecto de su propia responsabilidad y la de otras personas, así como los elementos que por desarrollo del procedimiento dialógico se deban incluir en su régimen de condicionalidad.

- No obstante, aunque la Subsala advierte que el aspirante deberá optimizar sus propuestas en cuanto a reparación y no repetición en aspectos que a continuación señalará, estos elementos de su plan de aportes guardan cuando menos una vocación restauradora inicialmente aceptable. Se encuentran dirigidos hacia las comunidades afectadas por los hechos por los que fue condenado. Tienen la intención de contrarrestar los efectos del conflicto y señalan, si quiera preliminarmente, condiciones de viabilidad en lo presupuestal y logístico. Por lo tanto, serán aceptados para efectos del sometimiento como beneficio transicional original.

- Sin embargo, el señor MUVDI ARANGUENA deberá explicar de qué manera las propuestas presentadas permitirán alcanzar los fines de reparación y de no repetición, respecto de los bienes jurídicos afectados por su asociación con grupos paramilitares, específicamente respecto de libertades políticas, confianza cívica y legitimidad del Estado.

- También deberá adicionar su propuesta con componentes simbólicos concretos de reparación. La Susbsala advierte que sus propuestas no pueden ser meramente retoricas, deberán señalar con absoluta claridad sus condiciones de realización. En su componente material, deberá proyectar en forma precisa el presupuesto y origen de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. El aspirante señaló que para realizar sus propuestas de reparación y de no repetición involucra a diversas entidades públicas y otros agentes privados. No basta con decirlo, es necesario que se sustenten tales afirmaciones verificando la viabilidad jurídica y administrativa para que lo propuesto se realice y no se limite a expresiones genéricas que puedan defraudar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Para estos efectos de le concederá un término de veinte (20) días hábiles.

- Por lo tanto, si bien la Subsala recalca el carácter preliminar del plan de aportes propuesto por el aspirante, también lo considera suficiente para efectos de determinar su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, como quiera que ya fue verificada la satisfacción de los factores de competencia.

- En ese sentido, la Subsala precisa que, el punto de condicionalidad, para aceptar el sometimiento a la JEP de comparecientes voluntarios, basta con verificar la aptitud preliminar del plan de aportes e iniciar el proceso dialógico. Estos elementos se han corroborado en el presente pronunciamiento, con la intervención del Ministerio Público como representante de las víctimas. Sin embargo, para la procedencia de otras medidas, en primer lugar los beneficios transitorios y anticipados, la JEP debe contar con elementos que permitan certificar avances en el cumplimiento de dicho plan, principalmente aportes concretos verificables al esclarecimiento de la verdad.

- Por lo tanto, en atención a los principios de gradualidad y proporcionalidad que caracterizan constitucionalmente a las medidas del sistema, solo hasta tanto la JEP cuente con elementos concretos de cumplimiento del compareciente frente al régimen de condicionalidad, podrá entrarse a considerar la procedencia de otros beneficios, como la libertad transitoria, condicionada y anticipada o la remisión del asunto a la Sección de Revisión para que ejerza sus competencias en el estudio de la sustitución de la sanción penal.

En consecuencia, en la parte resolutiva de la referida Resolución se dispuso:

*“PRIMERO. – ACEPTAR el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz presentado por el Señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, identificado con cédula de ciudadanía número 8.735.167 de Barranquilla, únicamente por el proceso identificado bajo radicado 30716, por el que la Corte Suprema de Justicia lo declaro autor de concierto para delinquir, agravado por financiar la ilícita asociación y con la circunstancia de mayor punibilidad consistente en ejecutar la conducta sobre recursos destinados de manera licita a la satisfacción de las necesidades básicas de una comunidad, según lo considerado en la parte motiva de este pronunciamiento.*

*SEGUNDO – ORDENAR a la Secretaria Judicial de la Sala, para que en coordinación con la Secretaria Ejecutiva de la corporación adelanten las gestiones necesarias para que el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA identificado con cédula de ciudadanía número 8.735.167 de Barranquilla, actualmente privado de la libertad, suscriba el acata oficial de sometimiento ante la JEP.*

*TERECERO - REQUERIR al señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA para que de conformidad con lo expuesto y dentro de un término máximo de veinte (20) días hábiles desde la notificación de este pronunciamiento, ajuste y en sede de ello precise de qué manera el plan de aportes presentado permitirá alcanzar los fines de reparación y de no repetición, respecto de los bienes jurídicos afectados por su asociación con grupos paramilitares, específicamente respecto de las libertades políticas, confianza cívica y legitimidad del Estado.*

*CUARTO – REQUERIR al señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA para que de conformidad con lo expuesto y dentro de un término máximo de veinte (20) días hábiles desde la notificación de este pronunciamiento, adicione su plan de aportes con componentes de sus propuestas de reparación material y de garantías de o repetición. Para lo cual deberá proyectar en forma precisa el presupuesto y origen de los recursos necesarios para llevarlas a cabo y además explique la viabilidad jurídica y administrativa de involucrar a entidades públicas y otros agentes en su realización.*

*QUINTO – ACALRAR al señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA que la propuesta que presentó como plan de aportes a la transición es susceptible de modificaciones, de conformidad con el seguimiento que para su cumplimiento efectúan los órganos competentes de la JEP y en el marco del proceso dialógico que rige la Jurisdicción (…)”.*

* Con escrito radicado el 28 de enero de 2020, el aspirante presentó su propuesta para el componente de garantías de no repetición de su plan de aportes a la transición.

Acorde con el trámite que se realizado por el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, resulta imperioso realizar precisión respecto de la normativa aplicable, para el habeas corpus, adicional a la ya indicada por el Despacho.

Para el caso, es necesario precisar que el artículo 1 del Decreto 700 de 2017, establece:

*“Acción de habeas corpus. La dilación u omisión injustificada de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad condicional la que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017, darán lugar a la acción de habeas corpus bajo los parámetros y el procedimiento establecidos en el artículo 30 de la Constitución Política y en la Ley 1095 de 2006 que la desarrolla”.*

Conforme a lo anterior y para decidir el caso en concreto, el Juzgado atiende por utilidad conceptual lo definido por el Consejo de Estado, en providencia del 14 de agosto de 2017[[2]](#footnote-2), en cuanto luego de realizar el estudio del marco previsto en la Ley 1820 de 2016, y frente a una acción de habeas corpus, estableció la improcedencia del misma, al precisar lo siguiente:

“(…)

*De acuerdo a ello, el juez constitucional que conozca de hábeas corpus siempre deberá verificar si el actor agotó los medios judiciales a su alcance y si los mismos habrían permitido garantizar con eficacia y celeridad el respeto del derecho a la libertad. Sólo así se puede predicar la procedencia de la acción constitucional sin desnaturalizar la esencia misma del Estado Social de Derecho, máxime si se tiene en cuenta que el escenario primordial para elevar las peticiones relacionadas con la libertad de los acusados es el proceso penal.*

*Se insiste, la acción constitucional está llamada a garantizar el derecho a la libertad de las personas, solamente, cuando se es privado de la libertad de manera ilegal o, cuando este (el derecho a la libertad) se limita en un lapso mayor al permitido por el ordenamiento jurídico, es decir, cuando la privación de ese derecho fundamental es ilegalmente prolongada*

***En este punto, se advierte que en el asunto de la referencia, la solicitud de hábeas corpus resulta a todas luces improcedente****, toda vez que el señor Gustavo Montaña Montaña: i)* ***no se encuentra privado de la libertad de manera ilegal****, en tanto ello es en cumplimiento de sentencias judicial proferidas por autoridades competentes, a través de las cuales fue condenado, por un lado a 240 meses de prisión por los delitos de homicidio y falsedad ideológica y, por otro, a 210 meses de prisión por el delito de homicidio agravado y otros, las cuales se encuentran en firme y debidamente ejecutoriadas48 y, ii)* ***no se le está prolongando de manera ilegal la privación de la libertad, toda vez que aún no ha cumplido las penas de arresto que le fueron impuestas.***

***Cosa distinta es, que el actor pretenda que a través de la solicitud de hábeas corpus se decida de manera favorable su pretensión reconocimiento del beneficio de la libertad transitoria,*** *condicionada y anticipada, en los términos del artículo 51 de la Ley 1820 de 2016, transcrito en línea anteriores, para lo cual, debe agotarse el procedimiento establecido en el artículo 53 Ibídem, el cual se encuentra a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y, el funcionario judicial quien tenga a cargo la causa penal. Señala la norma.*

*Al respecto, se advierte que la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada, lejos de ser una causal que haga procedente la acción constitucional del hábeas corpus,49, es un beneficio reconocido en favor de los agentes del Estado “propio del sistema integral expresión del tratamiento penal especial diferenciado, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera”, en el marco de la Ley 1820 de 2016, cuyo reconocimiento está supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos y bajo un procedimiento especial, tal como se extrae de la normativa que antecede.*

*Es decir, una vez realizada la lista de los posibles beneficiarios de los tratamientos penales especiales por parte del Ministerio de Defensa Nacional, este la remitirá al Secretario Ejecutivo Transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz, ante quien el interesado deberá suscribir una acta en la que acepta acogerse a dicha jurisdicción, posteriormente, éste (el secretario) deberá verificar que el sujeto cumpla con los requisitos establecidos para tal fin, y en el evento de ser así, deberá comunicarlo al funcionario judicial que este conociendo de la causa penal, quien, con fundamento en ello, deberá de manera inmediata adoptar la decisión que materialice el reconocimiento del mencionado beneficio (haciendo un control material y formal de la solicitud independientemente de que el Secretario de la JEP haya considerado que se cumplieron las exigencias previstas en la Ley 1820 de 2016 –ver decisiones CSJ 49253 de 10 de mayo de 2017 y CSJ 43546 de 24 de julio de 2017-).*

***Dicho lo anterior, se insiste en que la acción de hábeas corpus no es el mecanismo judicial para obtener el reconocimiento del beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada****, tal como lo pretende el señor Gustavo Montaña Montaña, cosa distinta sería que ya se le hubiere reconocido el mismo (****previo agotamiento de todas las etapas)*** *y,* ***aun así, las autoridades competentes se negaran a dejarlo en libertad, evento este último, en el que si resultaría procedente la acción constitucional***(Negrilla fuera de texto).

Acorde con la precisión realizada por el Consejo de Estado en la providencia que se trascribe, advierte el Despacho que el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA pretende acreditar el cumplimiento de lo requerido mediante la Resolución 000985 del 21 de febrero de 2020, únicamente con la interposición de habeas corpus, tal y como lo indicó el Magistrado Ponente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, al dar respuesta a la presente acción constitucional, de tal manera que previo al 27 de marzo de 2020, no se ha analizado el cumplimiento por parte del accionante a lo ordenado por esa Jurisdicción, en la referida resolución, ni se han agotado de manera completa las etapas dialógica y de verificación al cumplimiento de las propuestas presentadas por el accionante ante la JEP.

Así como para este momento se presentan circunstancias de fuerza mayor en el territorio nacional relacionado con la pandemia COVID 19, que conllevó al cierre de los términos procesales en la Jurisdicción Especial para la Paz, en ese sentido cobra especial relevancia lo definido en el Acuerdo AOG 009 del 16 de marzo de 2020, “*Por el cual se suspenden audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz*”, proferido por la presidenta de la JEP y demás funcionarios de esa Corporación, mediante ordenó la suspensión de audiencias y términos judiciales en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, a partir de la fecha y hasta el 20 de marzo de 2020*.* Suspensión de términos procesales que fue extendida, a través de la Circular 015 de 2020 del 22 de marzo de 2020 expedida por la presidenta y la secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial Para La Paz, hasta el 13 de abril de 2020.

Así las cosas, en el presente asunto no se presenta la dilación u omisión injustificada para resolver sobre la petición de libertad anticipada del accionante, como quiera que aun cuando el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA pretende advertir el cumplimiento del requerimiento por parte de dicha jurisdicción, para las misma los términos procesales se encuentran suspendidos.

En este punto, el Juzgado precisa que no es procedente mediante la acción de habeas corpus, la cual tiene un alcance concreto y limitado a la privación de la libertad, pretender sustituir al juez natural para decidir respecto de la aplicación de los beneficios fijados en la Ley 1820 de 2016, por cuanto ello escapa a la teleología de la acción constitucional, lo cual la torna improcedente en el presente asunto, de tal manera que la accionante deberá atender las decisiones que respecto de la solicitud de libertad anticipada defina la JEP, una vez se reanuden los términos procesales en esa jurisdicción.

Por otra parte, resulta imperioso señalar que el señorPEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, no se encuentra privada de la libertad de manera ilegal, pues la reclusión en la en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB –“LA PICOTA”, corresponde al cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia del 3 de mayo de 2017, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que no encuentra este Despacho que el accionante se le esté prolongando de manera ilegal la privación de la libertad, por cuanto la pena que se le impuso es de 161 meses de prisión; máxime cuando según lo manifestado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, despacho asignado para el cumplimiento de la pena, manifiesta que de dicha pena, ha descontado 104 meses y 12.48 días, motivo por el cual le restan 56 meses y 17.52 días para el cumplimiento efectivo de la pena.

En cuanto a la procedencia del habeas corpus para ordenar el subrogado penal previsto en el artículo 64 del Código Penal, conviene precisar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 14 de diciembre de 2018[[3]](#footnote-3), con relación a la procedencia e improcedencia de la acción de habeas corpus en dicho sentido, precisó:

“*La Ley Estatutaria 1095 de 2006 establece en su artículo 1º que el habeas corpus tutela la libertad personal cuando alguien es privado de ella i) con violación de las garantías constitucionales o legales y ii) en el evento de prolongación ilegal de la restricción de la libertad.*

*También procede la garantía de la libertad cuando se presenta alguno de los siguientes eventos[[4]](#footnote-4):*

*(1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.*

*La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado, por su parte, que cuando existe un proceso judicial en trámite, la acción de hábeas corpus no puede impetrarse con las siguientes finalidades:*

1. ***Sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad;***
2. *Reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal;*
3. *Desplazar al funcionario judicial competente y,*
4. *Obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.[[5]](#footnote-5)*

*También ha dicho que cuando existe un proceso judicial en trámite, sólo es posible interponer la acción en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, «cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios».[[6]](#footnote-6)*

De acuerdo con lo anterior, es necesario que en primera medida se acuda ante el Juez Tercero de Control de Garantías de Bogotá, quien tiene la competencia para decir respecto de esa solicitud, solicitud que el accionante no acreditó haber realizado, es decir, como primera primera medida, la petición de la libertad por el cumplimiento de la 3/5 parte a que hace referencia el accionante, ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, juez natural competente para la definición del cumplimiento o no de la pena.

Todo lo anterior, conlleva a concluir que el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, no se encuentra en la actualidad, privado injustamente de la libertad y por lo tanto habrá de rechazarse la acción de habeas corpus en el presente asunto por improcedente, en tanto que no es posible por esta vía sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad, que para el caso están previstas ante el JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ y la SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS – JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, una vez se reanuden los términos procesales.

En mérito de lo expuesto, el Juez Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

**RESUELVE**

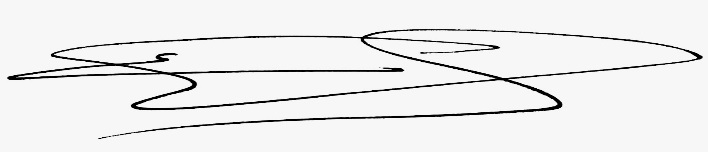
**PRIMERO:** **RECHAZAR** por improcedente la acción constitucional de HABEAS CORPUS invocada por el señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: Notificar** de la manera más expedita al señor PEDRO MARY MUVDI ARANGUENA, a quien se le debe entregar copia de la presente providencia. Se impone la carga al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB –“LA PICOTA”, de realizar de manera inmediata, la notificación personal al accionante, y acreditar dicha notificación ante este juzgado.

**TERCERO: Notificar** de la manera más expedita a todos los accionados y a la vinculada, remitiendo copia de la presente providencia.

Firmado en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2020, a las 6:30 p.m.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

****

**ERICSON SUESCUN LEÓN**

**Juez**

1. Proceso No. 35896 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL - Magistrado Ponente: ALFREDO GOMEZ QUINTERO. [↑](#footnote-ref-1)
2. SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B. Radicación: 25000-23-42-000-2017-03795-01(HC) Actor: GUSTAVO MONTAÑA MONTAÑA Demandado: SECRETARÍA EJECUTIVA TRANSITORIA DE JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ Y OTROS C.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ [↑](#footnote-ref-2)
3. AHP5505-2018. RADICACIÓN. 54402. M.P. JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Constitucional, sentencia C-260/99. [↑](#footnote-ref-4)
5. CSJ, AHP 11 sep. 2013, Rad. 42220; AHP 4860-2014, Rad. 4860 [↑](#footnote-ref-5)
6. CSJ, AH, 26 jun 2008. Rad. 30066, entre otros. [↑](#footnote-ref-6)